

FORO INTERNACIONAL POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO

México: desafíos para aumentar el ritmo de crecimiento y mejorar la equidad

Jorge Máttar, Director Adjunto de la Sede Subregional de la CEPAL en México

NOTAS PARA LA PRESENTACIÓN

7 de Febrero 2007

1. Reformas en América Latina y México: avances, rezagos y retos

A lo largo de las últimas dos décadas prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe emprendieron profundas reformas que buscaban ajustar los desequilibrios macroeconómicos y dar un renovado impulso al crecimiento. Las reformas se basaron en el supuesto de que al otorgar un mayor peso a los mecanismos de mercado en la asignación de recursos, al reorientar el aparato productivo hacia las exportaciones y al achicar al Estado y acotar su intervención en la esfera económica, América Latina lograría entrar en una senda de crecimiento elevado de largo plazo.

Al cabo de tres o cuatro lustros de reformas, aunque con diferencias entre países, se abrieron las economías y se aceleraron las exportaciones, se privatizaron empresas públicas, se redujo la inflación, y se estabilizaron los balances fiscales. Sin embargo, el crecimiento económico, si bien en promedio ha sido mayor que en los ochenta — especialmente en los últimos cuatro años— dista de ser lo suficientemente elevado como para generar los empleos que la población latinoamericana urgentemente requiere. Las reformas fueron exitosas en la estabilización de la economía nominal, es decir en abatir la inflación y el déficit fiscal, pero sus efectos en dinamizar la economía real han sido decepcionantes: en general el crecimiento económico ha sido volátil y fluctúa en torno a una tasa de expansión muy baja.

Más aun, estos logros no resultan tan espectaculares respecto al resto de países en desarrollo, en virtud de que casi todos ellos también han abierto sus economías, han privatizado sus empresas estatales, saneado sus finanzas públicas y reducido la inflación. La diferencia es que, durante los últimos quince años, el crecimiento económico de América Latina ha sido inferior y más volátil que el de buena parte del resto de regiones de mundo en desarrollo. México ha sido, junto con Chile, el país que más avanzó en estas reformas, pero a diferencia de Chile, la economía mexicana en este lapso ha tenido un ritmo medio de expansión más bajo y algo más volátil que el promedio de la región.

La falta de dinamismo a lo largo de este periodo de la economía de México y de la vasta mayoría de países de la región se ha traducido en un deterioro agudo y sistemático de las condiciones de los mercados de trabajo, incrementándose el subempleo y el desempleo, la precariedad contractual y la migración hacia dentro y fuera de la región buscando oportunidades laborales y mejores remuneraciones. Dada esta desmejora del empleo, no

debe sorprender que en estas dos décadas la reducción de la pobreza haya muy paulatina y que tengamos hoy en día altas vulnerabilidad y desprotección sociales que urgen corregir.

De lo anterior la CEPAL deriva un par de lecciones fundamentales: i) La estabilidad macroeconómica nominal es necesaria pero insuficiente para lograr un crecimiento económico elevado de largo plazo con equidad. ii) El Estado debe tener un papel activo en la economía, menos como productor directo de bienes y servicios, y más para crear condiciones de inversión, regular mercados clave, fortalecer la capacidad de innovación y ayudar a ir generando una nueva estructura productiva cuyas ventajas competitivas estén basadas más en el conocimiento y menos en salarios bajos; todo ello mediante intervenciones selectivas en la economía, y ejerciendo el liderazgo en la política pública. La gestión macroeconómica debe estar acompañada de políticas de desarrollo productivo a nivel meso y micro, y de desarrollo social; solo este enfoque integral ayudará a lograr avances significativos en la reducción de la pobreza y la inequidad. Los avances en estos dos ámbitos propician la cohesión social, el incremento de la productividad y por lo tanto el crecimiento económico.

2. La coyuntura actual

El desempeño económico de América Latina y México en los cuatro años recientes da pauta para ver el futuro de largo plazo con cierto optimismo, aunque con cautela. En efecto, la tasa de crecimiento del producto real en 2003-2006 (4,4% en promedio) es la mayor de un cuatrienio en más de dos décadas y el aumento del PIB por habitante (11.6% en 2003-2006) es muy superior al que se observó en todo el periodo 1980-2002 (2,2%). A su vez, en general el ahorro ha aumentado, las finanzas públicas se han fortalecido y la inflación permanece bajo control. Sin embargo, todavía hay retos cruciales en el ámbito económico y rezagos preocupantes en materia de reducción de la pobreza y la desigualdad. Además, América Latina es la región con los mayores índices de desigualdad de ingresos en todo el mundo.

Resolver estos retos exige, en mayor o menor grado, repensar o rediseñar ciertos aspectos de las estrategias de desarrollo y de las reformas económicas, que se han venido aplicando en la región. Si bien se puede esperar que la actual bonanza de la economía internacional se debilite durante el 2007, todo hace pensar que el ciclo positivo, aunque con menor dinamismo, en especial de parte de la economía de Estados Unidos, se mantenga en los próximos años. Asimismo, es de esperar que los precios de los principales productos de exportación de la región permanezcan relativamente elevados, al menos en comparación con los niveles de los ochenta y los noventa. Este escenario no está exento de riesgos, porque la persistencia de grandes desequilibrios globales genera una cuota de incertidumbre sobre la alternativa de una corrección gradual de los mismos. En particular es de esperar una considerable volatilidad de los términos de intercambio que enfrenta la región.

Dado la previsible y ya observable gradual desaceleración de la economía de Estados Unidos, México puede ser uno de los países que enfrente un panorama internacional menos favorable durante el corriente año, por lo que cabe prever un menor ritmo de crecimiento que el experimentado en 2006.

Una coyuntura levemente desfavorable en un contexto externo que en general puede definirse como bueno, así como el inicio de un nuevo gobierno, es una buena oportunidad para repensar la estrategia de desarrollo de México en el largo plazo.

3. Los desafíos para aumentar el ritmo de crecimiento económico y mejorar la equidad

Reconociendo que no hay una mezcla única de políticas económicas, ni un estrategia que sea válida y aplicable a todos los países de la región, la CEPAL considera que dos objetivos centrales para fortalecer el desarrollo de México son aumentar su tasa de crecimiento económico de manera sostenida y abatir los altos niveles de desigualdad; acercar al país a esos objetivos presenta a su vez desafíos para la acción de la política pública que a juicio de la CEPAL son fundamentales para elevar el ritmo de crecimiento y avanzar hacia una mayor equidad: a ellos me referiré a continuación.

Reducir la volatilidad. En primer lugar, hay que consolidar los avances macroeconómicos en la esfera nominal (inflación) y, en el empeño hacia el logro de una tasa de crecimiento económico más alta, debe buscarse también reducir su volatilidad. En los últimos 25 años la tasa de crecimiento de México ha sido más volátil que el promedio latinoamericano, que de por sí ya es alto, pues duplica a la media mundial.

Un bajo e inestable ritmo de crecimiento tiene grandes costos económicos y sociales, pues desincentiva la inversión y el desarrollo productivo y afecta especialmente a los más pobres, porque provoca una reducción del empleo y restringe el acceso a la protección social. Por eso es necesario adoptar políticas que permitan mitigar los altibajos de la economía mediante el uso de instrumentos contracíclicos. Las políticas contracíclicas permiten ahorrar en los períodos de bonanza, a fin de disponer de recursos y mayores márgenes de maniobra en los períodos recesivos y así atenuar las restricciones financieras y aliviar las necesidades de ajuste. Esto permite asegurar los avances logrados y defenderse mejor de los vaivenes de la economía mundial.

La volatilidad de la economía de México esta básicamente asociada al comportamiento de la economía de Estados Unidos y al precio del petróleo, y si bien poco puede hacer México para modificarlos, la política macroeconómica puede incidir en la reducción de la volatilidad, principalmente a través de políticas contracíclicas tanto en el ámbito fiscal como otras vinculadas con el comportamiento del precio del petróleo, que serán tratadas con amplitud por el Secretario Ejecutivo de la CEPAL en el pánel de retos macro.

Sólo quisiera destacar aquí que un expediente de la política pública para reducir la volatilidad de la economía consistiría en la implementación de incentivos para diversificar las exportaciones; de esa manera, una disminución en la demanda de Estados Unidos (que hoy representa el 85% del destino de las exportaciones mexicanas), podría subsanarse con un repunte de ventas externas a otros mercados.

Desarrollo productivo y articulación externa. Un crecimiento dinámico requiere cambios en la estructura productiva, que se pueden impulsar mediante políticas de desarrollo productivo. Con los recursos naturales y la maquila no alcanza, tenemos que generar un aparato productivo capaz de competir internacionalmente con base en más valor agregado, más conocimiento, más innovación tecnológica. No se trata de abandonar lo logrado, sino de definir qué más y cómo se puede potenciar el resto del aparato productivo; dónde y cómo descubrir nuestras ventajas competitivas en un mundo globalizado en el que ya no hay espacio para participar con base en salarios bajos y mano de obra escasamente calificada.

La transformación productiva está asociada a una mejor inserción externa. El acceso a nuevos mercados crea oportunidades y genera desafíos. Para aprovechar las oportunidades plenamente, las políticas de desarrollo productivo deben orientarse a propiciar la densificación de la estructura productiva, agregando valor y, sobre todo, conocimiento a las exportaciones. Componentes esenciales de esta estrategia son la capacitación de los recursos humanos y el desarrollo de sistemas amplios de innovación capaces de reproducir, adaptar y crear, para lo cual es útil la experiencia de países exitosos, como los del Sudeste de Asia. Para echar a andar políticas de este corte hay que fortalecer los ingresos públicos para ampliar el gasto en inversión, especialmente en infraestructura. Lograr ese objetivo requiere acordar un pacto fiscal de alcance nacional compatible con las necesidades de desarrollo del país.

Un desafío central es lograr que el dinamismo de las exportaciones se transmita al resto del aparato productivo, lo que requiere que el sector exportador se integre más y mejor con los productores locales de insumos, materias primas y servicios. Alrededor del 70% de las exportaciones manufactureras de México son generadas en meros procesos de ensamble de insumos importados bajo esquemas impositivos preferenciales. Si bien estas exportaciones pueden ser una base para la transformación productiva, como lo ha sido en otras economías asiáticas, la realidad es que ha habido escasos avances para lograr que a partir de esas exportaciones se desarrollen ventajas competitivas basadas en la incorporación tecnológica, conocimiento y una mano de obra crecientemente calificada. Una inserción externa basada en estos principios constituye un componente básico para mejorar la competitividad, además de otros elementos que revisamos a continuación.

Elevar la Competitividad (papel de la inversión). La competitividad de México requiere fortalecerse, tanto en el mercado interno como en el internacional, en los que ha cedido participación frente a competidores como China. En el último Informe de la Competitividad Global del Foro Económico Mundial México ocupa el lugar 58 de una lista de 125 países. Según este índice, las posiciones más rezagadas son Infraestructura 64; Instituciones 69; Educación superior y capacitación 71.

El ascenso de la competitividad requiere una clara mejora de la infraestructura, de los recursos humanos y del costo de ciertos insumos básicos, como son la electricidad, el gas natural y las telecomunicaciones. Más competencia, mejor regulación y un cumplimiento estricto de ésta son necesarias. La experiencia de América Latina y México en los últimos 15/20 años pone en evidencia que las promesas de la privatización y de la liberalización comercial y financiera son difíciles de cumplir si no existe una

institucionalidad fuerte de promoción de la competencia. En industrias con altos niveles de concentración y barreras a la entrada (telecomunicaciones, banca, electricidad), la política de competencia puede contribuir a que las ganancias de productividad se transfieran efectivamente a los usuarios en forma de menores precios y mejores productos, lo cual es a fin de cuentas un objetivo central de la política de competencia.

Elevar la competitividad de México precisa también de una mayor inversión, pública y privada. Desde el inicio de los años ochenta la infraestructura en América Latina y el Caribe se ha rezagado respecto a las economías de Asia, y en general a las economías semi-industrializadas incluyendo a China, en la medida en que el ajuste fiscal se recargó en este campo y la inversión privada no compensó su retracción. El nivel de la infraestructura es un determinante tanto del crecimiento económico como de la distribución del ingreso en países en vías de desarrollo. La competitividad internacional exige vialidades, puertos y sistemas de comunicaciones de calidad. Además la infraestructura en agua, electricidad y servicios básicos tiende a mejorar las condiciones de vida de los pobres. En consecuencia, ampliar la infraestructura bien puede ser también un elemento central de una estrategia de desarrollo integral orientada a abatir la pobreza y la desigualdad.

En México la tasa de inversión se ha elevado hasta representar 22,5% del PIB, el porcentaje más alto en más de 25 años, después del auge petrolero de fines de los años setenta. Esta cifra es alentadora, pues el repunte sostenido de la economía mexicana será posible sólo si la formación de capital fijo se eleva a representar al menos un 25% del PIB, de acuerdo con la evidencia internacional. Para lograrlo es indispensable incrementar la inversión pública en infraestructura, lo que indirectamente inducirá mayor inversión privada y directamente fortalecerá la competitividad de las empresas mexicanas. Cifras disponibles indican que a fines de los noventa, entre las economías grandes de América Latina, México era una de las que registraba la más baja inversión en infraestructura como proporción del PIB.

La transformación productiva necesita un intenso proceso de formación de capital. A través de la inversión pueden detonarse fases de repunte económico, y adaptar o aplicar nuevos conocimientos tecnológicos que eleven la productividad. Acelerar la inversión privada, sin embargo, no es una decisión de política pública sino el resultado de ésta. La inversión privada presupone identificar nuevas oportunidades de negocios, ya sea incrementando la rentabilidad en actividades existentes -para ampliarlas o modernizarlas- o bien descubriendo nuevos nichos o mercados. Un elemento que la impulsaría es el aumento en la inversión pública en infraestructura o en actividades complementarias.

Cabe subrayar que, en el caso de México, la concreción de nuevas inversiones por parte de empresas pequeñas requiere mejorar las condiciones de acceso al financiamiento bancario. Al momento, en México el crédito bancario para fines productivos como proporción del PIB es de los más bajos en el mundo. Las empresas que acceden a él suelen enfrentar altas tasas de interés, por lo que muchas firmas pequeñas quedan al margen del financiamiento, lo que inhibe sus posibilidades de crecimiento y mejora de su competitividad. Acrecentar el acceso al crédito de las pequeñas unidades contribuye también a mejorar la equidad. Asimismo, es necesario mejorar las condiciones de seguridad, tanto en materia de cumplimiento de leyes como en la lucha contra la

criminalidad, ambos aspectos especialmente relevantes para las decisiones de inversión foránea.

La mejora de la competitividad requiere el aumento de la productividad, lo que precisa un fuerte impulso a la educación, calificación y capacitación de la mano de obra en todas sus dimensiones. En una visión amplia, vale decir que en un mundo en constante y acelerado cambio, la educación y capacitación consisten cada vez menos en la especialización en el conocimiento de técnicas que pueden quedar obsoletas muy pronto, y cada vez más en saber resolver los nuevos problemas, para lo cual un ingrediente clave es el acceso y manejo de las tecnologías de la información y la comunicación.

La región y México muestran un considerable atraso en el monto y la eficiencia del gasto en innovación y desarrollo tecnológico. Queda mucho para mejorar en este ámbito, aunque es conveniente recordar que la innovación que precisan nuestros países no se restringe a los gastos en investigación y desarrollo, sino que debe incluir a la adopción y la adaptación, actividades que debería ser tanto o más relevantes en las economías de la región. Esto plantea nuevos desafíos que los países están comenzando a enfrentar. Por eso es necesario redoblar el esfuerzo para lograr una mayor participación de las universidades, centros de investigación y del sector privado en actividades de innovación y para diseñar un sistema de incentivos que permita mejorar la eficiencia. México cuenta con centros de investigación y universidades de excelencia —entre ellas la UNAM, dentro de las 100 mejores universidades del mundo— que podrían fortalecer sus vínculos con el sector privado para esos fines.

Mejorar la cohesión social. En nuestra región el término cohesión social emerge con gran fuerza en los últimos años, debido a la urgente necesidad de encarar pertinaces problemas: los altos índices de pobreza e indigencia; la extrema desigualdad que nos caracteriza, así como las diversas formas de discriminación y de exclusión social que tienen sus raíces en nuestra historia. Asimismo, el desarrollo regional nos enfrenta a una realidad cada vez más evidente: la dinámica del mercado del trabajo ha mostrado una escasa capacidad incluyente, en términos de la generación de empleo de calidad, sobre lo cual volveré enseguida.

El concepto que estamos desarrollando en la CEPAL considera tanto el conjunto de mecanismos de inclusión/exclusión que existen en una sociedad, como las percepciones que de ellos tienen las personas. Es decir, no sólo las brechas objetivas sino también la percepción de los ciudadanos. Estas percepciones son fundamentales, ya que determinan el sentido de pertenencia que tienen los individuos y los grupos a la sociedad como un todo. Inciden en la exclusión las brechas sociales y sus diversas dimensiones, que abarcan la desigualdad de ingresos, la exclusión de oportunidades económicas, la pobreza, el monto y la desigualdad de recursos efectivamente destinados a la inversión social. El sentido de pertenencia y la percepción de cohesión e integración social que tiene la ciudadanía deben ser tomados en cuenta por las políticas públicas.

El crecimiento económico, por sí mismo, no garantiza una rápida reducción de la pobreza ni de la desigualdad. Para que ello se logre, dicho crecimiento —además de ser elevado y sostenido— debe generar empleos de calidad, pero el mercado de trabajo en

América Latina y México dista de haber demostrado una capacidad incluyente, ni en términos de generación de empleo decente ni de niveles contributivos.

¿Cómo generar pronto el suficiente empleo de calidad?. Y más aun ¿cómo reducir la vulnerabilidad social?. Cabe subrayar que, aun suponiendo que se logre generar más y mejores empleos, en el corto y mediano plazos ello será insuficiente para garantizar la protección de la mayoría de la población frente a riesgos como la falta de ingresos, las enfermedades y el acceso a la seguridad social. Para enfrentar estos riesgos, la CEPAL considera fundamental avanzar en la consolidación de un esquema de protección social, que tenga a los derechos sociales como pauta normativa y a las desigualdades y restricciones presupuestarias como limitantes que es necesario reconocer y enfrentar.

Una expresión de la falta de cohesión social que caracteriza a América Latina son los persistentes niveles de desigualdad, así como el amplio número de pobres (205 millones de personas, equivalente a 40% de la población en 2005), de los cuales 79 millones, (16%), viven en condiciones de indigencia; estas cifras se vuelven más significativas ante la carencia de una adecuada red de protección social. En México el porcentaje de pobres se redujo paulatinamente después del fuerte incremento que observó en 1995, para llegar a un 35% en 2006, con un porcentaje de pobreza extrema de 11,7%, según estimaciones de la CEPAL.¹ Estas cifras son alentadoras, aunque habrá que mantener el esfuerzo en esa lucha, especialmente en condiciones de bajo crecimiento económico como el que se anticipa en 2007.

La pobreza en las sociedades modernas, desarrolladas o en vías de desarrollo, está asociada a la falta de oportunidades de la población en edad de trabajar para encontrar una ocupación adecuadamente remunerada en una economía cuya producción es cada vez más tecnificada. En nuestra región el problema cobra un matiz más grave ante la falta de dinamismo de las economías y, así, no se da una utilización plena de la mano de obra disponible, que en nuestra región es en general abundante y poco calificada. El problema social se ve agudizado por la carencia de mecanismos de compensación por desempleo a cargo del Estado. Así, reconociendo que la rigidez del mercado de trabajo favorece el corporativismo y entorpece la competitividad, la CEPAL ha insistido en señalar que la flexibilidad o adaptabilidad laboral sólo puede darse en el marco de una mayor protección social que atienda a las personas, incluyendo a las que no estén empleadas en el sector formal, sobre lo cual mi colega Andras Uthoff hablará en detalle en el pánel de Pobreza y desigualdad.

Se trata, pues, de un problema social creciente que en el caso de nuestros países amenaza la cohesión social y pone en cuestión la solidez de las instituciones democráticas.

No hay persona más pobre que la que carece de un empleo. La falta de empleo decente y las diferencias salariales de México con los Estados Unidos explica el fenómeno migratorio de mano de obra mexicana a ese país que se estima en mas de medio millón de

¹ Los cálculos del gobierno (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) muestran la misma tendencia a la baja. Para 2005: Alimentaría 18,2%; Capacidades 24,7%; Patrimonio: 47.0%, cifras prácticamente idénticas a las de 2004, excepto la pobreza alimentaria que aumentó casi un punto porcentual.

personas al año y que, aunque no puede considerarse como nuevo, ha adquirido en los últimos años mayores proporciones y efectos en ambas economías, al persistir las condiciones que lo propician.

La CEPAL sostiene desde hace tiempo que la reducción de la inequidad y de la pobreza no sólo es un imperativo ético sino que, además, es condición necesaria para lograr mayores tasas de crecimiento económico. Las grandes desigualdades en la distribución del ingreso y de la riqueza, y en general la inequidad, es la síntesis de estructuras económicas y sociales muy segmentadas, que han dado origen a una profunda exclusión social y a la debilidad de nuestro desarrollo democrático. Estas desigualdades son, a la vez, causa y efecto de otras disparidades. Entre ellas, las que se derivan de la educación y el empleo, y las que corresponden a las adscripciones étnicas y de género, a la distribución territorial de la población y los recursos, y a la dinámica demográfica. Como bien sabemos, el tema de la equidad no se agota en el ámbito de las políticas sociales. La razón es simple: los adelantos que podamos lograr en el ámbito social se verían potenciados en el contexto de un mayor crecimiento económico basado en la transformación productiva, que brinde oportunidades a las empresas más postergadas y genere nuevos empleos de mayor calidad.

Para finalizar, me referiré a tres componentes de la **política social** que en la CEPAL hemos identificado como esenciales: los principios que la rigen, los recursos y la institucionalidad. ¿Cuáles son los principios? universalidad, solidaridad y eficiencia, En la educación por ejemplo, el objetivo debe ser la universalidad, tal como México hace con la educación básica. Es recomendable focalizar en ciertas coyunturas, pero frente a problemas como la salud y la educación, el enfoque debe ser lo más universal y solidario posible. Si no hay solidaridad en los aportes, difícilmente habrá suficiente presión tributaria para materializar el principio de solidaridad. Un ejemplo de políticas focalizadas es el Programa Oportunidades, reconocido en el mundo por sus resultados en combate a la pobreza.

Sin recursos públicos suficientes es muy difícil cumplir las metas de las políticas sociales. Así, una presión tributaria; del 11% del producto no alcanza; es necesario elevar los ingresos públicos, lo cual a su vez requiere un pacto fiscal, solidario, en el que los que más tienen, aporten más. Asimismo, debemos fortalecer la institucionalidad social y promover la transparencia de las instituciones, que sean evaluadas, que rindan cuentas, para que la política social tenga credibilidad, lo que convierte a la institucionalidad en elemento central que acompaña cualquier desarrollo de las políticas sociales.

La CEPAL ha insistido en la necesidad de buenas instituciones en lo macro, en lo social, en lo político, instituciones acordes con las leyes, si, pero que emanen de consensos sociales y políticos transparentes. Es decir, se trata más del proceso que del instrumento legal *per se*.

Resumiendo y para terminar: quizá el gran reto de México y América Latina es el de lograr consensos políticos que permitan orientar y dirigir la política pública hacia metas que vayan más allá de mantener una tasa baja de inflación y un déficit fiscal sustentable, para abarcar también al crecimiento económico alto y sostenido y a un pleno empleo decente como parte del paquete macroeconómico de estabilidad ¿para qué estas metas? Primero, para facilitar la mejora de la cohesión social mediante políticas en el ámbito productivo y

social y con mejores instituciones. A partir de esos consensos necesitamos un pacto fiscal que sea parte del acuerdo social y que asegure los recursos necesarios. Segundo, para viabilizar la implementación de una estrategia de desarrollo que ponga énfasis en la diversificación de la estructura productiva, para lo que se requiere mejorar la educación, priorizar la innovación y estimular la inversión, lo que a su vez, nos lleva de nuevo a los ingredientes adicionales que proponemos en la ecuación de estabilidad: crecimiento del producto y el empleo, como objetivos fundamentales de esos consensos políticos y sociales.

¿Cómo lograr esos consensos?. Un ingrediente clave es el justo balance entre **lo público y lo privado**. Esto es central para la construcción institucional. Precisamos pues de políticas públicas que impliquen objetivos de interés público, en las que no sólo interviene el gobierno en su diseño, discusión e implementación, sino también la sociedad civil en su conjunto. América Latina requiere un mejor estado y más mercado. La economía de mercado debe tener más fuerza para aprovechar y permitir un desarrollo pleno de la iniciativa empresarial y la capacidad de innovación individual. Por otra parte se requiere un Estado más eficiente que asegure que los beneficios de este desarrollo de la capacidad empresarial de diversos individuos, grupos y regiones se distribuyan de manera más equitativa para lograr una mejora en el bienestar colectivo, en el desarrollo de la sociedad en su conjunto.
